

Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

1º) Que recurrió de ilegalidad, al tenor del artículo 28 de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A. en contra del Consejo para la Transparencia, por la Decisión de Amparo Rol C1863-21, de 22 de junio del 2021, por medio de la cual se dispuso acoger parcialmente el amparo deducido por doña Paulette Desormeaux, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de copia del contrato firmado para la adquisición de dosis de vacunación contra el SARS-CoV-2, elaboradas por Oxford AstraZeneca, reservándose toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento.

Previas citas legales pide que se deje sin efecto la referida Decisión, por cuanto la información solicitada reviste el carácter de confidencial, involucra secretos comerciales de su representada y, además, su publicidad afecta el interés nacional, particularmente en lo que se refiere a la salud pública de sus habitantes, y en consecuencia que se resuelva, en su lugar, que se rechaza en todas sus partes la solicitud de información presentada por la solicitante.

En cuanto al derecho, sostiene como causales de ilegalidad las siguientes: 1º) Su divulgación afecta los derechos comerciales o económicos de AstraZeneca, puesto que se trata de información sumamente sensible y secreta (artículo 21 N° 2 Ley de Transparencia), considerando que su representada se encuentra amparada por el secreto comercial; y 2) Se produce la afectación del Interés Nacional al referirse a Salud Pública (artículo 21 N° 4 Ley de Transparencia)

Alude que existe una ausencia de motivación en el acto reclamado, el que además es carente de toda lógica. Agrega que además, no respeta los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y que éste contiene sólo menciones genéricas de normas jurídicas y hechos descritos en términos muy amplios para cimentar el acto administrativo.



Por otra parte, denuncia que se omite aplicar el test de daño, ya que expresa que el beneficio de entregar la información no es mayor al daño que se provoca con su entrega, sin efectuar dicho análisis razonado en la decisión de amparo.

Finalmente se refiere a la improcedencia de aplicar el principio de divisibilidad, toda vez que hay mucha información que no constituyen actos administrativos, sino que se trata de información relativa a un contrato celebrado entre un particular y la Administración.

Por todo lo anterior, solicita acoger en todas sus partes el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto la Decisión recaída en el amparo Rol C1863-21 del Consejo para la Transparencia, por la cual se ordenó entregar a la reclamante la copia del contrato firmado para la adquisición de dosis contra el SARS-CoV-2, elaboradas por Oxford AstraZeneca, reservando de aquellos toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución de este producto o, en su defecto, excluya aquella información que involucre las vacunas contra el COVID-19 elaboradas por Oxford AstraZeneca.

2º) Que, don David Ibaceta Medina, abogado, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia, informando el recurso, solicita su rechazo; toda vez que la Decisión de Amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, se ajustó a derecho y al espíritu del texto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, fundando sus alegaciones en los siguientes términos; primeramente refiere que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución Política de la República y, los artículos 5º, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar la Subsecretaría de Salud Pública en el ejercicio de sus funciones públicas. Luego refiere que la información que se ha ordenado entregar no afecta los derechos económicos ni comerciales de Astrazeneca S.A, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la citada ley.

Al efecto señala que no sólo debe invocarse la causal de reserva, sino que debe acreditarse el verbo rector de “afectar”, que contiene la norma en cuya virtud se sustenta y, que el sólo hecho que los contratantes establezcan



cláusulas de confidencialidad en los contratos que suscriben, no puede significar ni mucho menos afectar la primacía normativa de la Constitución Política de la República que establece el principio general de la publicidad. Indica que la Decisión de Amparo C1863-21 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre la adquisición de vacunas Covid-19 de parte de Astrazeneca, previa aplicación del principio de divisibilidad, y ello por cuanto no tiene la potencialidad de afectar el Interés Nacional, de forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configura en la especie la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 del citado cuerpo normativo. En efecto refiere que se tomaron todos los resguardos del caso, ya que se ordenó la entrega parcial de la información pedida, protegiendo los datos sensibles y confidenciales.

En suma, solicita el rechazo de la acción interpuesta, por no existir ilegalidad alguna en la Decisión reclamada, y en consecuencia se confirme la Decisión de Amparo Rol C1863-21.

3º) Que en consideración a que el tercero interesado no evacuó el informe solicitado, se prescinde del mismo por resolución de esta Corte de fecha 28 de octubre de 2021.

4º) Que, como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los Órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

5º) Que, la información objeto del reclamo consiste en un contrato suscrito entre el Ministerio de Salud con la empresa Astrazeneca S.A. para adquirir vacunas por Covid 19, en el ejercicio de sus funciones públicas contenidas, entre otras, en el artículo 1º del DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las



Leyes N° 18.933 y N° 14.469, consistente en: “ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones” y encargarse de “La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas de conformidad a la letra e), del artículo 4°, de la citada ley.

En este contexto, el Subsecretario de Salud Pública, que de conformidad al artículo 9°, del aludido cuerpo normativo, le corresponde la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas, debe administrar además: “el financiamiento previsto para las acciones de salud pública, correspondientes a las prestaciones y actividades que se realicen para dar cumplimiento a programas de relevancia nacional y aquellas que la ley obligue a que sean financiadas por el Estado, independientemente de la calidad previsional del individuo o institución que se beneficie, pudiendo ejecutar dichas acciones directamente, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, de las entidades que integran el Sistema, o mediante la celebración de convenios con las personas o entidades que correspondan”.

6°) Que por su parte, el legislador he establecido en términos expresos que es pública la información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su origen, a menos que se encuentre sujeta a causales excepcionales de reserva, por ende, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Transparencia, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, el cual consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Luego el artículo 5° de la citada Ley establece que “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los



documentos que le sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece la ley y las previstas en otra leyes de quórum calificado.

Asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

En este mismo sentido, el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

7º) Que, queda claro que ha sido el mismo legislador quien establece el derecho de todas las personas a acceder a “los contratos y acuerdos” que obran en poder del Estado, y especialmente aquellos suscritos por un órgano de la Administración para el cumplimiento de sus funciones públicas, como ocurre con el contrato requerido para efectos de adquirir vacunas y así enfrentar la actual pandemia que afecta a nuestro país como al mundo entero.

8º) Que, en mérito de los antecedentes se advierte que los argumentos en que la reclamante funda la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, son genéricos por lo que la Decisión de Amparo, lo consigna expresamente: “.. en la especie, la reclamada únicamente mencionó que la divulgación de la información solicitada, podría perjudicar la adquisición, entrega o recepción de los productos para la inoculación de la población como medida tendiente a detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19. Por su parte, el tercero sólo señaló que aquella influye en el interés nacional al referirse a la salud pública del país en su conjunto y a sus intereses económicos y comerciales, al propender dentro de un marco de confidencialidad que las negociaciones arriben al beneficio de la población toda. De esta forma,



tanto la Subsecretaría como la farmacéutica, no mencionan de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y/ o a la salud pública”. De esta forma, poco coherente resulta que la reclamante señale que el Consejo no aplicó el test de daño para resolver el amparo, ya que precisamente se realizó el señalado test, y en dicha virtud se concluyó que en mérito de las alegaciones de la reclamante, por cierto genéricas, no resultaba posible determinar el daño o afectación concreta y real al bien jurídico cuya vulneración se alegó.

9º) Que, en cuanto a la alegación fundada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, que se funda en que la publicidad de la información afectaría los derechos económicos y comerciales de la reclamante, la Ley de Transparencia, en concordancia con lo mandado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. En consecuencia, la hipótesis de secreto o reserva exige respecto de cada una de ellas un examen de “afectación”, esto es un análisis para ponderar el daño que la publicidad puede generar al valor jurídicamente protegido.

10º) Que, en el mismo sentido ha de destacarse que la carga de la argumentación y prueba de toda causal de secreto, es de la empresa interesada; lo que en la especie tampoco aconteció.

11º) Que, en cuanto a las cláusulas de confidencialidad pactadas en los contratos suscritos por la reclamante y también constituyen fundamento de sus alegaciones, debe señalarse que la supremacía contractual, la autonomía de la voluntad principio básico en materia contractual, no puede anteponerse a una norma constitucional obligatoria, ya que éstas, no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

12º) Que, esta Corte comparte plenamente los fundamentos de la decisión atacada por esta vía, en cuanto a que la publicidad parcial del contrato de adquisición de vacunas, fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor participación en el plan nacional de vacunación de carácter voluntario, en beneficio e interés de la población toda.



Así entonces, la información solicitada resulta ser relevante para efectos de la comprobación en relación con lo informado por la autoridad, respecto de los datos sobre características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de las mismas, la posibilidad de comparación con las restantes vacunas disponibles para inocular a la población, todo lo cual claramente incide en la tranquilidad, seguridad y confianza en relación a las dosis administradas.

13º) Que, sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que esta materia ya fue resuelta por esta Corte, en consecuencia, el contrato objeto del presente reclamo, ya es público.

14º) Que, en estas circunstancias la Decisión de Amparo que se ha atacado por este reclamo, se encuentra ajustada a derecho, se dictó dentro de las atribuciones y competencias que expresamente el legislador entregó al Consejo recurrido, por lo que el acto recurrido resulta legal y fundado por lo que no cabe sino rechazar la presente reclamación.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 5, 21, 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara que **se rechaza, con costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por AstraZeneca en contra del Consejo para la Transparencia.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la Ministra Sra. Book.**

**Contencioso N° 374- 2021.**

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.



DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 09:08:12

JENNY MARTA BOOK REYES  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:05:26

ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 08:51:57





Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

1º) Que recurrió de ilegalidad, al tenor del artículo 28 de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A. en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C585-21 de 22 de junio del 2021, por medio de la cual se dispuso acoger parcialmente el amparo deducido por don Nicolás Massai del Real, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de copia de los contratos firmados por el Ministerio de Salud, a la fecha de la solicitud, con empresas farmacéuticas nacionales o internacionales para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, reservando toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento, así como todo dato personal de contexto que pueda contener.

Previas citas legales pide que se deje sin efecto la decisión, por cuanto la información solicitada reviste el carácter de confidencial, involucra secretos comerciales de su representada y, además, su publicidad afecta el interés nacional, particularmente en lo que se refiere a la salud pública de sus habitantes, y se resuelva, en su lugar, que se rechaza en todas sus partes la solicitud de información presentada por la solicitante o, en su defecto, excluya aquella información que involucre las vacunas contra el COVID-19 elaboradas por Oxford AstraZeneca.

En cuanto al derecho, sostiene como causales de ilegalidad las siguientes: 1º) Su divulgación afecta los derechos comerciales o económicos de AstraZeneca, puesto que se trata de información sumamente sensible y secreta (artículo 21 N° 2), considerando que su representada está amparada por el secreto comercial; y 2) Se produce la afectación del interés nacional al referirse a salud Pública (artículo 21 N° 4).

Alude que existe una ausencia de motivación en el acto reclamado, el que además es carente de toda lógica.

Refiere que el acto recurrido, no respeta los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y que éste contiene sólo menciones genéricas de normas y hechos en términos genéricos para cimentar el acto administrativo



Por otra parte, denuncia que se omite aplicar el test de daño, ya que expresa que el beneficio de entregar la información no es mayor al daño que provoca al entregarla, sin efectuar dicho análisis razonado en la Decisión de Amparo.

Finalmente se refiere a la improcedencia de aplicar el principio de divisibilidad, toda vez que hay mucha información que no son actos administrativos, sino que se trata de información relativa a un contrato celebrado entre un particular y la Administración.

Por todo lo anterior, solicita acoger en todas sus partes el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto la Decisión recaída en el amparo Rol C585-21 del Consejo para la Transparencia, por la cual se ordenó entregar a la reclamante entregar la copia de los contratos suscritos por el Ministerio de Salud, a la fecha de la solicitud, con empresas farmacéuticas nacionales o internacionales para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, reservando de aquellos toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución de este producto o, en su defecto excluya aquella información que involucre las vacunas contra el COVID-19 elaboradas por Oxford AstraZeneca.

**2º)** Que, don David Ibaceta Medina, abogado Director General y representante del Consejo para la Transparencia, informando el reclamo, solicita su rechazo. Indica que, la Decisión de Amparo adoptada, se ajustó a derecho y al espíritu del texto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, fundando sus alegaciones en los siguientes hechos, a saber, 1) Astrazeneca S.A carece de legitimación activa para reclamar de ilegalidad invocando la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley del Ramo, por cuanto el supuesto básico de ésta consiste en la “afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido”, cuya invocación solo corresponde al órgano de la administración solicitado de información; 2) La información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución y los artículos 5º, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar la Subsecretaría de Salud Pública en el ejercicio de sus funciones públicas; 3) La información que se ha ordenado entregar no afecta los derechos económicos ni comerciales de Astrazeneca S.A, por lo que no se configura a su respecto la



causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley, ya referida. Al efecto: a) No solo debe invocarse la causal, sino que acreditarse el verbo rector de “afectar”, y b) El solo hecho que los contratantes establezcan cláusulas de confidencialidad no puede afectar la primacía normativa de la Constitución Política de la República que establece el principio general de la publicidad; y 4) La decisión de amparo C585-21 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre la adquisición de vacunas covid-19 de parte de Astrazeneca, previa aplicación del principio de divisibilidad, por cuanto no tiene la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configuró en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la ley. En efecto, se tomaron los resguardos del caso, ya que se ordenó la entrega parcial de la información pedida.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción interpuesta, por no existir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva confirmar la Decisión de Amparo Rol C585-21.

3º) Que en consideración a que tercero interesado no evacuó el informe solicitado, se prescinde del mismo por resolución de 20 de enero de 2022.

4º) Que, como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

5º) Que, la información objeto del reclamo consiste en un contrato suscrito entre el Ministerio de Salud con la empresa Astrazeneca S.A. para adquirir vacunas por Covid 19, en el ejercicio de sus funciones públicas contenidas, entre otras, en el artículo 1º del DFL N° 1, que fija el texto



refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las Leyes N° 18.933 y N° 14.469, consistente en: “ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones” y encargarse de “La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas de conformidad a la letra e), del artículo 4º, de la citada ley.

En este contexto, el Subsecretario de Salud Pública, que de conformidad al artículo 9º, del aludido cuerpo normativo, le corresponde la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas, debe administrar además: “el financiamiento previsto para las acciones de salud pública, correspondientes a las prestaciones y actividades que se realicen para dar cumplimiento a programas de relevancia nacional y aquellas que la ley obligue a que sean financiadas por el Estado, independientemente de la calidad previsional del individuo o institución que se beneficie, pudiendo ejecutar dichas acciones directamente, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, de las entidades que integran el Sistema, o mediante la celebración de convenios con las personas o entidades que correspondan”.

6º) Que por su parte, el legislador he establecido en términos expresos que es pública la información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su origen, a menos que se encuentre sujeta a causales excepcionales de reserva, por ende, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Transparencia, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, el cual consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Luego el artículo 5º de la citada Ley establece que “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de



los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece la ley y las previstas en otra leyes de quórum calificado.

Asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

En este mismo sentido, el inciso 2º del artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

7º) Que, queda claro que ha sido el mismo legislador quien establece el derecho de todas las personas a acceder a “los contratos y acuerdos” que obran en poder del Estado, y especialmente aquellos suscritos por un órgano de la Administración para el cumplimiento de sus funciones públicas, como ocurre con el contrato requerido para efectos de adquirir vacunas y así enfrentar la actual pandemia que afecta a nuestro país como al mundo entero.

8º) Que, en mérito de los antecedentes se advierte que los argumentos en que la reclamante funda la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, son genéricos por lo que la Decisión de Amparo, lo consigna expresamente: “.. en la especie, la reclamada únicamente mencionó que la divulgación de la información solicitada, podría perjudicar la adquisición, entrega o recepción de los productos para la inoculación de la población como medida tendiente a detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19. Por su parte, el tercero sólo señaló que aquella influye en el interés nacional al referirse a la salud pública del país en su conjunto y a sus intereses económicos y comerciales, al propender dentro de un marco de confidencialidad que las



negociaciones arriben al beneficio de la población toda. De esta forma, tanto la Subsecretaría como la farmacéutica, no mencionan de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y/ o a la salud pública”. De esta forma, poco coherente resulta que la reclamante señale que el Consejo no aplicó el test de daño para resolver el amparo, ya que precisamente se realizó el señalado test, y en dicha virtud se concluyó que en mérito de las alegaciones de la reclamante, por cierto genéricas, no resultaba posible determinar el daño o afectación concreta y real al bien jurídico cuya vulneración se alegó.

9º) Que, en cuanto a la alegación fundada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, que se funda en que la publicidad de la información afectaría los derechos económicos y comerciales de la reclamante, la Ley de Transparencia, en concordancia con lo mandado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. En consecuencia, la hipótesis de secreto o reserva exige respecto de cada una de ellas un examen de “afectación”, esto es un análisis para ponderar el daño que la publicidad puede generar al valor jurídicamente protegido.

10º) Que, en el mismo sentido ha de destacarse que la carga de la argumentación y prueba de toda causal de secreto, es de la empresa interesada; lo que en la especie tampoco aconteció.

11º) Que, en cuanto a las cláusulas de confidencialidad pactadas en los contratos suscritos por la reclamante y también constituyen fundamento de sus alegaciones, debe señalarse que la supremacía contractual, la autonomía de la voluntad principio básico en materia contractual, no puede anteponerse a una norma constitucional obligatoria, ya que éstas, no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

12º) Que, esta Corte comparte plenamente los fundamentos de la decisión atacada por esta vía, en cuanto a que la publicidad parcial del contrato de adquisición de vacunas, fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor



participación en el plan nacional de vacunación de carácter voluntario, en beneficio e interés de la población toda.

Así entonces, la información solicitada resulta ser relevante para efectos de la comprobación en relación con lo informado por la autoridad, respecto de los datos sobre características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de las mismas, la posibilidad de comparación con las restantes vacunas disponibles para inocular a la población, todo lo cual claramente incide en la tranquilidad, seguridad y confianza en relación a las dosis administradas.

13º) Que, sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que esta materia ya fue resuelta por esta Corte, en consecuencia, el contrato objeto del presente reclamo, ya es público.

14º) Que, en estas circunstancias la Decisión de Amparo que se ha atacado por este reclamo, se encuentra ajustada a derecho, se dictó dentro de las atribuciones y competencias que expresamente el legislador entregó al Consejo recurrido, por lo que el acto recurrido resulta legal y fundado por lo que no cabe sino rechazar la presente reclamación.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 3, 5, 21, 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara que **se rechaza, con costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A., en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C585-21.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la Ministra Sra. Book.**

**N° Contencioso Administrativo-375-2021.**

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Illtma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.





DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 09:08:15

JENNY MARTA BOOK REYES  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:05:29

ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 08:52:01



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

1º) Que recurrió de ilegalidad, al tenor del artículo 28 de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A. en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C1049-21 de 01 de julio de 2021, por medio de la cual se dispuso acoger parcialmente el amparo deducido por don Manuel Aresti Durban, en contra de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ordenando la entrega de las copias de los convenios para la adquisición de las vacunas COVID-19 entre el Estado de Chile y las empresas Pfizer (BioNTech), AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen) y Sinovac; reservando toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento, así como todo dato personal de contexto que pueda contener, sin perjuicio que deberá comunicarse por el órgano requerido el hecho de que parte de los antecedentes no obraran en su poder al momento de la interposición del requerimiento.

Previas citas legales pide que se deje sin efecto la decisión, por cuanto la información solicitada reviste el carácter de confidencial, involucra secretos comerciales de su representada, además, su publicidad afecta el interés nacional, particularmente en lo que se refiere a la salud pública de sus habitantes, y además, su divulgación afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido al encontrarse el proceso de adquisición de las vacunas aún en curso, resolviendo en su lugar, que se rechaza en todas sus partes la solicitud de información presentada por la solicitante, o en su defecto, excluya aquella información que involucre las vacunas contra el COVID-19 elaboradas por Oxford AstraZeneca.

En cuanto al derecho, se sostuvieron como causales de ilegalidad las siguientes: 1º) Su divulgación afecta los derechos comerciales o económicos de AstraZeneca, puesto que se trata de información sumamente sensible y secreta (artículo 21 N° 2), considerando que su representada está amparada por el secreto comercial; y 2) Se produce la afectación del interés nacional al referirse a salud Pública (artículo 21 N° 4).



Alude que existe una ausencia de motivación en el acto reclamado, el que además es carente de toda lógica.

Arguye que no respeta los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y que en el mismo hay sólo menciones genéricas de normas y hechos en términos genéricos para cimentar el acto administrativo

Por otra parte, denuncia que se omite aplicar el test de daño, ya que expresa que el beneficio de entregar la información no es mayor al daño que provoca al entregarla, sin efectuar dicho análisis razonado en la decisión de amparo.

Finalmente se refiere a la improcedencia de aplicar el principio de divisibilidad, toda vez que hay mucha información que no son actos administrativos, sino que se trata de información relativa a contratos celebrados entre un particular y la Administración.

Por todo lo anterior, solicita acoger en todas sus partes el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto la Decisión recaída en el amparo Rol C1049-21 del Consejo para la Transparencia, por la cual se ordenó entregar a la reclamante entregar las copias de los convenios para la adquisición de las vacunas COVID-19 entre el Estado de Chile y las empresas Pfizer (BioNTech), AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen) y Sinovac; reservando de estos últimos toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento, así como todo dato personal de contexto que pueda contener, sin perjuicio que deberá comunicarse por el órgano requerido el hecho de que parte de los antecedentes no obraran en su poder al momento de la interposición del requerimiento.

**2º)** Que, comparece don David Ibaceta Medina, abogado, Director General y representante del Consejo para la Transparencia, quien informando solicita el rechazo del reclamo, por cuanto la Decisión de Amparo adoptada, se ajustó a derecho y al espíritu del texto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, fundando sus alegaciones en los siguientes hechos, a saber, 1) Astrazeneca S.A carece de legitimación activa para reclamar de ilegalidad invocando la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley del Ramo, por cuanto el supuesto básico de ésta consiste en la “afectación del debido cumplimiento de las funciones



del órgano requerido”, cuya invocación solo corresponde al órgano de la administración solicitado de información; 2) La información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución y los artículos 5º, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar la Subsecretaría de Salud Pública en el ejercicio de sus funciones públicas; 3) La información que se ha ordenado entregar no afecta los derechos económicos ni comerciales de Astrazeneca S.A, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley, ya referida. Al efecto: a) No solo debe invocarse la causal, sino que acreditarse el verbo rector de “afectar”, y b) El solo hecho que los contratantes establezcan cláusulas de confidencialidad no puede afectar la primacía normativa de la Constitución Política de la República que establece el principio general de la publicidad; y 4) La decisión de amparo C1049-21 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre la adquisición de vacunas covid-19 de parte de Astrazeneca, previa aplicación del principio de divisibilidad, por cuanto no tiene la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configuró en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la ley. En efecto, se tomaron los resguardos del caso, ya que se ordenó la entrega parcial de la información pedida.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción interpuesta, por no existir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva confirmar la Decisión de Amparo Rol C1049-21.

**3º)** Que en consideración a que tercero interesado no remitió el informe solicitado, se tiene por evacuado dicho trámite en rebeldía.

**4º)** Que como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.



Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

5º) Que, la información objeto del reclamo consiste en un contrato suscrito entre el Ministerio de Salud con la empresa Astrazeneca S.A. para adquirir vacunas por Covid 19, en el ejercicio de sus funciones públicas contenidas, entre otras, en el artículo 1º del DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las Leyes N° 18.933 y N° 14.469, consistente en: “ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones” y encargarse de “La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas de conformidad a la letra e), del artículo 4º, de la citada ley.

En este contexto, el Subsecretario de Salud Pública, que de conformidad al artículo 9º, del aludido cuerpo normativo, le corresponde la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas, debe administrar además: “el financiamiento previsto para las acciones de salud pública, correspondientes a las prestaciones y actividades que se realicen para dar cumplimiento a programas de relevancia nacional y aquellas que la ley obligue a que sean financiadas por el Estado, independientemente de la calidad previsional del individuo o institución que se beneficie, pudiendo ejecutar dichas acciones directamente, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, de las entidades que integran el Sistema, o mediante la celebración de convenios con las personas o entidades que correspondan”.

6º) Que por su parte, el legislador he establecido en términos expresos que es pública la información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su origen, a menos que se encuentre sujeta a causales excepcionales de reserva, por ende, de conformidad a lo dispuesto



en el artículo 4° de la Ley de Transparencia, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, el cual consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Luego el artículo 5° de la citada Ley establece que “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece la ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

En este mismo sentido, el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

7°) Que, queda claro que ha sido el mismo legislador quien establece el derecho de todas las personas a acceder a “los contratos y acuerdos” que obran en poder del Estado, y especialmente aquellos suscritos por un órgano de la Administración para el cumplimiento de sus funciones públicas, como ocurre con el contrato requerido para efectos de adquirir vacunas y así enfrentar la actual pandemia que afecta a nuestro país como al mundo entero.

8°) Que, en mérito de los antecedentes se advierte que los argumentos en que la reclamante funda la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, son genéricos por lo que la



Decisión de Amparo, lo consigna expresamente: “.. en la especie, la reclamada únicamente mencionó que la divulgación de la información solicitada, podría perjudicar la adquisición, entrega o recepción de los productos para la inoculación de la población como medida tendiente a detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19. Por su parte, el tercero sólo señaló que aquella influye en el interés nacional al referirse a la salud pública del país en su conjunto y a sus intereses económicos y comerciales, al propender dentro de un marco de confidencialidad que las negociaciones arriben al beneficio de la población toda. De esta forma, tanto la Subsecretaría como la farmacéutica, no mencionan de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y/ o a la salud pública”. De esta forma, poco coherente resulta que la reclamante señale que el Consejo no aplicó el test de daño para resolver el amparo, ya que precisamente se realizó el señalado test, y en dicha virtud se concluyó que en mérito de las alegaciones de la reclamante, por cierto genéricas, no resultaba posible determinar el daño o afectación concreta y real al bien jurídico cuya vulneración se alegó.

9º) Que, en cuanto a la alegación fundada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, que se funda en que la publicidad de la información afectaría los derechos económicos y comerciales de la reclamante, la Ley de Transparencia, en concordancia con lo mandatado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. En consecuencia, la hipótesis de secreto o reserva exige respecto de cada una de ellas un examen de “afectación”, esto es un análisis para ponderar el daño que la publicidad puede generar al valor jurídicamente protegido.

10º) Que, en el mismo sentido ha de destacarse que la carga de la argumentación y prueba de toda causal de secreto, es de la empresa interesada; lo que en la especie tampoco aconteció.

11º) Que, en cuanto a las cláusulas de confidencialidad pactadas en los contratos suscritos por la reclamante y también constituyen fundamento de sus alegaciones, debe señalarse que la supremacía contractual, la autonomía de la voluntad principio básico en materia contractual, no puede





anteponerse a una norma constitucional obligatoria, ya que éstas, no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

12º) Que, esta Corte comparte plenamente los fundamentos de la decisión atacada por esta vía, en cuanto a que la publicidad parcial del contrato de adquisición de vacunas, fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor participación en el plan nacional de vacunación de carácter voluntario, en beneficio e interés de la población toda.

Así entonces, la información solicitada resulta ser relevante para efectos de la comprobación en relación con lo informado por la autoridad, respecto de los datos sobre características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de las mismas, la posibilidad de comparación con las restantes vacunas disponibles para inocular a la población, todo lo cual claramente incide en la tranquilidad, seguridad y confianza en relación a las dosis administradas.

13º) Que, sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que esta materia ya fue resuelta por esta Corte, en consecuencia, el contrato objeto del presente reclamo, ya es público.

14º) Que, en estas circunstancias la Decisión de Amparo que se ha atacado por este reclamo, se encuentra ajustada a derecho, se dictó dentro de las atribuciones y competencias que expresamente el legislador entregó al Consejo recurrido, por lo que el acto recurrido resulta legal y fundado por lo que no cabe sino rechazar la presente reclamación.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 3, 5, 21, 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara que **se rechaza, con costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A., en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C1049-21.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la Ministra Sra. Book**

**N° Contencioso Administrativo-391-2021.**



Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 09:08:17

JENNY MARTA BOOK REYES  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:05:36

ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 10:39:00



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

1º) Que recurrió de ilegalidad, al tenor del artículo 28 de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A. en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C2104-21 de 01 de julio de 2021, por medio de la cual se dispuso acoger parcialmente el amparo deducido por doña Galit Korol Díaz, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de la copia del contrato de vacunas Covid-19 que firmó Chile con AstraZeneca, reservándose toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento.

Previas citas legales pide que se deje sin efecto la decisión, por cuanto la información solicitada reviste el carácter de confidencial, involucra secretos comerciales de su representada, y además, su publicidad afecta el interés nacional, particularmente en lo que se refiere a la salud pública de sus habitantes, resolviendo en su lugar, que se rechaza en todas sus partes la solicitud de información presentada por la solicitante, o en su defecto, excluya aquella información que involucre las vacunas contra el COVID-19 elaboradas por Oxford AstraZeneca.

En cuanto al derecho, señala como fundamentos los siguientes: 1º) Su divulgación afecta los derechos comerciales o económicos de AstraZeneca, puesto que se trata de información sumamente sensible y secreta (artículo 21 N° 2), considerando que su representada está amparada por el secreto comercial; y 2) Se produce la afectación del interés nacional al referirse a salud Pública (artículo 21 N° 4).

Alude que existe una ausencia de motivación en el acto reclamado, el que además es carente de toda lógica.

Refiere que no respeta los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y el acto reclamado sólo contiene menciones genéricas de normas y hechos en términos muy genéricos para cimentar la Decisión reclamada.

Por otra parte, indica que se omite aplicar el test de daño, ya que expresa que el beneficio de entregar la información no es mayor al daño



que provoca al entregarla, sin efectuar dicho análisis razonado en la decisión de amparo.

Finalmente se refiere a la improcedencia de aplicar el principio de divisibilidad, toda vez que hay mucha información que no son actos administrativos, sino que se trata de información relativa a contratos celebrados entre un particular y la Administración.

Por todo lo anterior, solicita acoger en todas sus partes el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto la Decisión recaída en el amparo Rol C2104-21 del Consejo para la Transparencia, por la cual se ordenó entregar a la reclamante entregar la copia del contrato de vacunas Covid-19 que firmó Chile con AstraZeneca, reservando toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución de este producto y, con ello, que no se divulgue la información requerida.

2º) Que en cuanto a la causa acumulada a los presentes autos, recurre de ilegalidad el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio de Salud, contra la resolución de amparo ya individualizada, dictada por el Consejo para la Transparencia, argumentando como causales fundantes de la ilegalidad, las infracción contenida en el artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la información del Estado, aprobada por el artículo 1º de la Ley N° 20.285.

Mediante su recurso la Administración solicita se acoja el recurso interpuesto, dejando sin efecto la decisión impugnada, y denegando en consecuencia, la entrega de la información solicitada por el requirente.

3º) Que, comparece don David Ibaceta Medina, abogado, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia, quien informando los recursos solicita su rechazo; toda vez que, según refiere, la Decisión de Amparo adoptada, se ajustó a derecho y al espíritu del texto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Refiere como fundamentos para el rechazo los siguientes:

1) Astrazeneca S.A carece de legitimación activa para reclamar de ilegalidad invocando la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley del Ramo, por cuanto el supuesto básico de ésta consiste en la “afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido”, cuya



invocación solo corresponde al órgano de la administración solicitado de información; 2) La información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución y los artículos 5º, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar la Subsecretaría de Salud Pública en el ejercicio de sus funciones públicas; 3) La información que se ha ordenado entregar no afecta los derechos económicos ni comerciales de Astrazeneca S.A, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley, ya referida. Al efecto: a) No solo debe invocarse la causal, sino que acreditarse el verbo rector de “afectar”, y b) El solo hecho que los contratantes establezcan cláusulas de confidencialidad no puede afectar la primacía normativa de la Constitución Política de la República que establece el principio general de la publicidad; y 4) La decisión de amparo C2104-21 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre la adquisición de vacunas covid-19 de parte de Astrazeneca, previa aplicación del principio de divisibilidad, por cuanto no tiene la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configuró en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la ley. En efecto, se tomaron los resguardos del caso, ya que se ordenó la entrega parcial de la información pedida.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción interpuesta, por no existir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva confirmar la Decisión de Amparo Rol C2104-21.

4º) Que en consideración a que tercero interesado no remitió el informe solicitado, se tiene por evacuado dicho trámite en rebeldía.

5º) Que como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el



debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

6º) Que, como primera cuestión esta Corte comparte la alegación del Consejo recurrido, en cuanto a la falta de legitimación activa de Astrazeneca para invocar como causal de reserva la contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en cuanto el supuesto básico de ésta consiste en la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; invocación que sólo corresponde al órgano de la Administración solicitado de información.

De esta forma, sólo a éste – el órgano – corresponde ponderar y evaluar si determinada solicitud le provoca o no una afectación al cumplimiento de sus funciones, en cualquiera de los supuestos contenidos en los literales a), b) o c) de la citada norma. Por lo tanto, no puede un tercero, en este caso el reclamante Astrazeneca S.A. ponderar e invocar la causal en análisis, pues no se encuentra establecida en su beneficio, tampoco para su resguardo.

7º) Que, queda claro que ha sido el mismo legislador quien establece el derecho de todas las personas a acceder a “los contratos y acuerdos” que obran en poder del Estado, y especialmente aquellos suscritos por un órgano de la Administración para el cumplimiento de sus funciones públicas, como ocurre con el contrato requerido para efectos de adquirir vacunas y así enfrentar la actual pandemia que afecta a nuestro país como al mundo entero.

8º) Que, en mérito de los antecedentes se advierte que los argumentos en que la reclamante funda la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, son genéricos por lo que la Decisión de Amparo, lo consigna expresamente: “.. en la especie, la reclamada únicamente mencionó que la divulgación de la información solicitada, podría perjudicar la adquisición, entrega o recepción de los productos para la inoculación de la población como medida tendiente a detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19. Por su parte, el tercero sólo señaló que aquella influye en el interés nacional al referirse a la salud pública del país en su conjunto y a sus intereses económicos y comerciales, al propender dentro de un marco de confidencialidad que las



negociaciones arriben al beneficio de la población toda. De esta forma, tanto la Subsecretaría como la farmacéutica, no mencionan de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y/ o a la salud pública”. De esta forma, poco coherente resulta que la reclamante señale que el Consejo no aplicó el test de daño para resolver el amparo, ya que precisamente se realizó el señalado test, y en dicha virtud se concluyó que en mérito de las alegaciones de la reclamante, por cierto genéricas, no resultaba posible determinar el daño o afectación concreta y real al bien jurídico cuya vulneración se alegó.

9º) Que, en cuanto a la alegación fundada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, que se funda en que la publicidad de la información afectaría los derechos económicos y comerciales de la reclamante, la Ley de Transparencia, en concordancia con lo mandado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. En consecuencia, la hipótesis de secreto o reserva exige respecto de cada una de ellas un examen de “afectación”, esto es un análisis para ponderar el daño que la publicidad puede generar al valor jurídicamente protegido.

10º) Que, en el mismo sentido ha de destacarse que la carga de la argumentación y prueba de toda causal de secreto, es de la empresa interesada; lo que en la especie tampoco aconteció.

11º) Que, en cuanto a las cláusulas de confidencialidad pactadas en los contratos suscritos por la reclamante y también constituyen fundamento de sus alegaciones, debe señalarse que la supremacía contractual, la autonomía de la voluntad principio básico en materia contractual, no puede anteponerse a una norma constitucional obligatoria, ya que éstas, no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

12º) Que, esta Corte comparte plenamente los fundamentos de la decisión atacada por esta vía, en cuanto a que la publicidad parcial del contrato de adquisición de vacunas, fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor





participación en el plan nacional de vacunación de carácter voluntario, en beneficio e interés de la población toda.

Así entonces, la información solicitada resulta ser relevante para efectos de la comprobación en relación con lo informado por la autoridad, respecto de los datos sobre características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de las mismas, la posibilidad de comparación con las restantes vacunas disponibles para inocular a la población, todo lo cual claramente incide en la tranquilidad, seguridad y confianza en relación a las dosis administradas.

13º) Que, sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que esta materia ya fue resuelta por esta Corte, en consecuencia, el contrato objeto del presente reclamo, ya es público.

14º) Que, en estas circunstancias la Decisión de Amparo que se ha atacado por este reclamo, se encuentra ajustada a derecho, se dictó dentro de las atribuciones y competencias que expresamente el legislador entregó al Consejo recurrido, por lo que el acto recurrido resulta legal y fundado por lo que no cabe sino rechazar la presente reclamación.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 3, 5, 21, 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara que **se rechazan, con costas**, los reclamos de ilegalidad deducido por doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A., y por el Consejo de Defensa del Estado, en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C2104-2021.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la Ministra Sra. Book.**

**N° Contencioso Administrativo-392-2021 (Ac. 394-2021)**

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic



Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:45:00

JENNY MARTA BOOK REYES  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:05:41

ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 10:39:03



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

1º) Que recurrió de ilegalidad, al tenor del artículo 28 de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A. en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C171-2021 de 01 de julio del 2021, por medio de la cual se dispuso acoger parcialmente el amparo deducido por don Jorge Poblete Herrera, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando entregar una lista de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud y compañías internacionales para el suministro de vacunas contra el SARS-CoV-2, una vez obtenidas las 2 de 45 autorizaciones respectivas y copia de dichos acuerdos, debiendo reservar toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento, así como todo dato personal de contexto que pueda contener.

Previas citas legales pide que se deje sin efecto la decisión, por cuanto la información solicitada reviste el carácter de confidencial, involucra secretos comerciales de su representada y, además, su publicidad afecta el interés nacional, particularmente en lo que se refiere a la salud pública de sus habitantes, y se resuelva, en su lugar, que se rechaza en todas sus partes la solicitud de información presentada por la solicitante.

En cuanto al derecho, se sostuvieron como causales de ilegalidad las siguientes: 1º) Su divulgación afecta los derechos comerciales o económicos de AstraZeneca, puesto que se trata de información sumamente sensible y secreta (artículo 21 N° 2), considerando que su representada está amparada por el secreto comercial; y 2) Se produce la afectación del interés nacional al referirse a Salud Pública (artículo 21 N° 4).

Alude que existe una ausencia de motivación en el acto reclamado, el que además es carente de toda lógica.

Indica que no respeta los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y que en el mismo hay sólo menciones genéricas de normas y hechos en términos genéricos para cimentar el acto administrativo



Por otra parte, denuncia que se omite aplicar el test de daño, ya que expresa que el beneficio de entregar la información no es mayor al daño que provoca al entregarla, sin efectuar dicho análisis razonado en la decisión de amparo.

Finalmente se refiere a la improcedencia de aplicar el principio de divisibilidad, toda vez que hay mucha información que no son actos administrativos, sino que se trata de información relativa a un contrato celebrado entre un particular y la Administración.

Por todo lo anterior, solicita acoger en todas sus partes el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto la Decisión recaída en el amparo Rol C171-2021 del Consejo para la Transparencia.

2º) Que, comparece don David Ibaceta Medina, abogado Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia, quien informando el reclamo de ilegalidad, solicita su rechazo, toda vez que la Decisión de Amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, se ajustó a derecho y al espíritu del texto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, fundando sus alegaciones en los siguientes hechos, a saber, 1) La información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución y los artículos 5º, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar la Subsecretaría de Salud Pública en el ejercicio de sus funciones públicas; 2) La información que se ha ordenado entregar no afecta los derechos económicos ni comerciales de Astrazeneca S.A, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley, ya referida. Al efecto: a) No solo debe invocarse la causal, sino que acreditarse el verbo rector de “afectar”, y b) El solo hecho que los contratantes establezcan cláusulas de confidencialidad no puede afectar la primacía normativa de la Constitución Política de la República que establece el principio general de la publicidad; y 3) La decisión de amparo C171-21 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre la adquisición de vacunas covid-19 de parte de Astrazeneca, previa aplicación del principio de divisibilidad, por cuanto no tiene la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configuró en la especie la causal de reserva



del artículo 21 N° 4 de la ley. En efecto, se tomaron los resguardos del caso, ya que se ordenó la entrega parcial de la información pedida.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción interpuesta, por no existir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva confirmar la Decisión de Amparo Rol C171-21.

3º) Que en consideración a que tercero interesado no evacuó el informe solicitado, se prescinde del mismo por resolución de 03 de diciembre de 2021.

4º) Que como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

5º) Que, la información objeto del reclamo consiste en un contrato suscrito entre el Ministerio de Salud con la empresa Astrazeneca S.A. para adquirir vacunas por Covid 19, en el ejercicio de sus funciones públicas contenidas, entre otras, en el artículo 1º del DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las Leyes N° 18.933 y N° 14.469, consistente en: “ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones” y encargarse de “La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas de conformidad a la letra e), del artículo 4º, de la citada ley.

En este contexto, el Subsecretario de Salud Pública, que de conformidad al artículo 9º, del aludido cuerpo normativo, le corresponde la



administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas, debe administrar además: “el financiamiento previsto para las acciones de salud pública, correspondientes a las prestaciones y actividades que se realicen para dar cumplimiento a programas de relevancia nacional y aquellas que la ley obligue a que sean financiadas por el Estado, independientemente de la calidad previsional del individuo o institución que se beneficie, pudiendo ejecutar dichas acciones directamente, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, de las entidades que integran el Sistema, o mediante la celebración de convenios con las personas o entidades que correspondan”.

6º) Que por su parte, el legislador he establecido en términos expresos que es pública la información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su origen, a menos que se encuentre sujeta a causales excepcionales de reserva, por ende, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Transparencia, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, el cual consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Luego el artículo 5º de la citada Ley establece que “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece la ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.



En este mismo sentido, el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

7º) Que, queda claro que ha sido el mismo legislador quien establece el derecho de todas las personas a acceder a “los contratos y acuerdos” que obran en poder del Estado, y especialmente aquellos suscritos por un órgano de la Administración para el cumplimiento de sus funciones públicas, como ocurre con el contrato requerido para efectos de adquirir vacunas y así enfrentar la actual pandemia que afecta a nuestro país como al mundo entero.

8º) Que, en mérito de los antecedentes se advierte que los argumentos en que la reclamante funda la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, son genéricos por lo que la Decisión de Amparo, lo consigna expresamente: “.. en la especie, la reclamada únicamente mencionó que la divulgación de la información solicitada, podría perjudicar la adquisición, entrega o recepción de los productos para la inoculación de la población como medida tendiente a detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19. Por su parte, el tercero sólo señaló que aquella influye en el interés nacional al referirse a la salud pública del país en su conjunto y a sus intereses económicos y comerciales, al propender dentro de un marco de confidencialidad que las negociaciones arriben al beneficio de la población toda. De esta forma, tanto la Subsecretaría como la farmacéutica, no mencionan de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y/ o a la salud pública”. De esta forma, poco coherente resulta que la reclamante señale que el Consejo no aplicó el test de daño para resolver el amparo, ya que precisamente se realizó el señalado test, y en dicha virtud se concluyó que en mérito de las alegaciones de la reclamante, por cierto genéricas, no resultaba posible determinar el daño o afectación concreta y real al bien jurídico cuya vulneración se alegó.





9º) Que, en cuanto a la alegación fundada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, que se funda en que la publicidad de la información afectaría los derechos económicos y comerciales de la reclamante, la Ley de Transparencia, en concordancia con lo mandado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. En consecuencia, la hipótesis de secreto o reserva exige respecto de cada una de ellas un examen de “afectación”, esto es un análisis para ponderar el daño que la publicidad puede generar al valor jurídicamente protegido.

10º) Que, en el mismo sentido ha de destacarse que la carga de la argumentación y prueba de toda causal de secreto, es de la empresa interesada; lo que en la especie tampoco aconteció.

11º) Que, en cuanto a las cláusulas de confidencialidad pactadas en los contratos suscritos por la reclamante y también constituyen fundamento de sus alegaciones, debe señalarse que la supremacía contractual, la autonomía de la voluntad principio básico en materia contractual, no puede anteponerse a una norma constitucional obligatoria, ya que éstas, no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

12º) Que, esta Corte comparte plenamente los fundamentos de la decisión atacada por esta vía, en cuanto a que la publicidad parcial del contrato de adquisición de vacunas, fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor participación en el plan nacional de vacunación de carácter voluntario, en beneficio e interés de la población toda.

Así entonces, la información solicitada resulta ser relevante para efectos de la comprobación en relación con lo informado por la autoridad, respecto de los datos sobre características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de las mismas, la posibilidad de comparación con las restantes vacunas disponibles para inocular a la población, todo lo cual claramente incide en la tranquilidad, seguridad y confianza en relación a las dosis administradas.



13º) Que, sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que esta materia ya fue resuelta por esta Corte, en consecuencia, el contrato objeto del presente reclamo, ya es público.

14º) Que, en estas circunstancias la Decisión de Amparo que se ha atacado por este reclamo, se encuentra ajustada a derecho, se dictó dentro de las atribuciones y competencias que expresamente el legislador entregó al Consejo recurrido, por lo que el acto recurrido resulta legal y fundado por lo que no cabe sino rechazar la presente reclamación.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 3, 5, 21, 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara que **se rechaza, con costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A., en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C171-21.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la Ministra Sra. Book.**

**N° Contencioso Administrativo-393-2021.**

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:45:09

JENNY MARTA BOOK REYES  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:05:43



ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 10:39:05



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

1º) Que recurrió de ilegalidad, al tenor del artículo 28 y 29 de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, doña Ruth Israel López, en representación del Ministerio de Salud, en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C-171-2021, por medio de la cual se dispuso acoger parcialmente el amparo deducido por don Jorge Poblete Herrera, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de una lista de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud y compañías internacionales para el suministro de vacunas contra el SARSCoV-2, una vez obtenidas las autorizaciones respectivas, y copia de dichos acuerdos, debiendo reservar aquella información referida a la estructura de costos y a la logística o distribución de los productos en comento, y debiendo tarjar, previamente, todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena.

Argumenta el recurrente la infracción contenida en el artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la información del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285.

Previas citas legales pide que se acoja el recurso, se deje sin efecto la decisión impugnada, denegando la entrega de información solicitada por el recurrente.

2º) Que, informando el Consejo para la Transparencia, solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad, toda vez que la Decisión de Amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, se ajustó a derecho y al espíritu del texto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Expone los siguientes argumentos: 1) El Ministerio de Salud no invocó ningún argumento en sede administrativa para denegar la información, puesto que no respondió dentro de plazo la solicitud presentada por don Jorge Poblete Herrera, ni tampoco evacuó descargos ante el Consejo; 2) La



información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el art. 8º, inciso 2º, de la constitución y los arts. 5º, art. 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar en poder de la subsecretaría de salud pública y constituir acuerdos celebrados por un Órgano de la Administración en el ejercicio de sus funciones públicas; 3) La decisión de amparo C171-21 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre la adquisición de vacunas covid-19 de parte de Astrazeneca, previa aplicación del principio de divisibilidad, por cuanto no tiene la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configuró en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la ley.

En efecto, refiere que se tomaron los resguardos del caso, ya que se ordenó la entrega parcial de la información pedida; y 4) Existe un interés público preponderante en el acceso a la información consistente en los acuerdos solicitados referentes al suministro de vacunas contra el SarsCov-2.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción interpuesta, por no existir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva confirmar la Decisión de Amparo Rol C171-21.

3º) Que en consideración a que tercero interesado no evacuó el informe solicitado, se prescinde del mismo por resolución de 20 de octubre de 2021.

4º) Que como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

5º) Que, la información objeto del reclamo consiste en un acuerdo o información suscrito entre el Ministerio de Salud con la empresa



Astrazeneca S.A. para adquirir vacunas por Covid 19, en el ejercicio de sus funciones públicas contenidas, entre otras, en el artículo 1° del DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las Leyes N° 18.933 y N° 14.469, consistente en: “ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones” y encargarse de “La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas de conformidad a la letra e), del artículo 4°, de la citada ley.

En este contexto, el Subsecretario de Salud Pública, que de conformidad al artículo 9°, del aludido cuerpo normativo, le corresponde la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas, debe administrar además: “el financiamiento previsto para las acciones de salud pública, correspondientes a las prestaciones y actividades que se realicen para dar cumplimiento a programas de relevancia nacional y aquellas que la ley obligue a que sean financiadas por el Estado, independientemente de la calidad previsional del individuo o institución que se beneficie, pudiendo ejecutar dichas acciones directamente, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, de las entidades que integran el Sistema, o mediante la celebración de convenios con las personas o entidades que correspondan”.

6°) Que por su parte, el legislador he establecido en términos expresos que es pública la información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su origen, a menos que se encuentre sujeta a causales excepcionales de reserva, por ende, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Transparencia, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, el cual consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.



Luego el artículo 5° de la citada Ley establece que “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece la ley y las previstas en otra leyes de quórum calificado.

Asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

En este mismo sentido, el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, informaciones y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

7º) Que, queda claro que ha sido el mismo legislador quien establece el derecho de todas las personas a acceder a “información y acuerdos” que obran en poder del Estado, y especialmente aquellos suscritos por un órgano de la Administración para el cumplimiento de sus funciones públicas, como ocurre con el acuerdo requerido para efectos de adquirir vacunas y así enfrentar la actual pandemia que afecta a nuestro país como al mundo entero.

8º) Que, en mérito de los antecedentes se advierte que los argumentos en que la reclamante funda la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, son genéricos por lo que la Decisión de Amparo, lo consigna expresamente: “.. en la especie, la reclamada únicamente mencionó que la divulgación de la información solicitada, podría perjudicar la adquisición, entrega o recepción de los productos para la inoculación de la población como medida tendiente a detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19. Por su parte, el tercero sólo señaló que aquella influye en el interés nacional al referirse a la





salud pública del país en su conjunto y a sus intereses económicos y comerciales, al propender dentro de un marco de confidencialidad que las negociaciones arriben al beneficio de la población toda. De esta forma, tanto la Subsecretaría como la farmacéutica, no mencionan de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y/ o a la salud pública”. De esta forma, poco coherente resulta que la reclamante señale que el Consejo no aplicó el test de daño para resolver el amparo, ya que precisamente se realizó el señalado test, y en dicha virtud se concluyó que en mérito de las alegaciones de la reclamante, por cierto genéricas, no resultaba posible determinar el daño o afectación concreta y real al bien jurídico cuya vulneración se alegó.

9º) Que, en cuanto a la alegación fundada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, que se funda en que la publicidad de la información afectaría los derechos económicos y comerciales de la reclamante, la Ley de Transparencia, en concordancia con lo mandado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. En consecuencia, la hipótesis de secreto o reserva exige respecto de cada una de ellas un examen de “afectación”, esto es un análisis para ponderar el daño que la publicidad puede generar al valor jurídicamente protegido.

10º) Que, en el mismo sentido ha de destacarse que la carga de la argumentación y prueba de toda causal de secreto, es de la empresa interesada; lo que en la especie tampoco aconteció.

11º) Que, en cuanto a las cláusulas de confidencialidad pactadas en los acuerdos suscritos por la reclamante y también constituyen fundamento de sus alegaciones, debe señalarse que la supremacía contractual, la autonomía de la voluntad principio básico en materia contractual, no puede anteponerse a una norma constitucional obligatoria, ya que éstas, no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

12º) Que, esta Corte comparte plenamente los fundamentos de la decisión atacada por esta vía, en cuanto a que la publicidad parcial del acuerdo de adquisición de vacunas, fortalece la confianza de la ciudadanía



en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor participación en el plan nacional de vacunación de carácter voluntario, en beneficio e interés de la población toda.

Así entonces, la información solicitada resulta ser relevante para efectos de la comprobación en relación con lo informado por la autoridad, respecto de los datos sobre características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de las mismas, la posibilidad de comparación con las restantes vacunas disponibles para inocular a la población, todo lo cual claramente incide en la tranquilidad, seguridad y confianza en relación a las dosis administradas.

13º) Que, sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que esta materia ya fue resuelta por esta Corte, en consecuencia, el acuerdo objeto del presente reclamo, ya es público.

14º) Que, en estas circunstancias la Decisión de Amparo que se ha atacado por este reclamo, se encuentra ajustada a derecho, se dictó dentro de las atribuciones y competencias que expresamente el legislador entregó al Consejo recurrido, por lo que el acto recurrido resulta legal y fundado por lo que no cabe sino rechazar la presente reclamación.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 3, 5, 21, 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara que **se rechaza, con costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C171-2021.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la Ministra Sra. Book.**

**N° Contencioso Administrativo-395-2021.**

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.



DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:45:28

JENNY MARTA BOOK REYES  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:05:46

ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 10:39:07



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

1º) Que recurrió de ilegalidad, al tenor del artículo 28 de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A. en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C2977-21 de 31 de agosto del 2021, por medio de la cual se dispuso acoger parcialmente el amparo deducido por doña Claudia Bahamondes Hernández, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de copia de los actos administrativos que dictan el plan de vacunación y que formalizan la compra de las vacunas que se utilizarán en dicho plan, de los acuerdos y/o contratos que se suscribieron para la compra de las vacunas, así como la información sobre la composición de cada una de las vacunas -con la descripción de las reacciones iatrogénicas-, sobre los mecanismos de control y certificaciones nacionales para verificar que la composición de las vacunas adquiridas es la descrita por el fabricante, informes estadísticos nacionales y regionales de casos con reacciones adversas a la fecha, actos administrativos que formalizan la utilización de la prueba PCR como diagnóstico de COVID-19 y de los estudios técnicos que se tuvieron a la vista para definir la prueba PCR como diagnóstico. Lo anterior, reservando de estos últimos toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento, así como todo dato personal de contexto que pueda contener.

Previas citas legales pide que se deje sin efecto la decisión, por cuanto la información solicitada reviste el carácter de confidencial, involucra secretos comerciales de su representada y, además, su publicidad afecta el interés nacional, particularmente en lo que se refiere a la salud pública de sus habitantes, y se resuelva, en su lugar, que se rechaza en todas sus partes la solicitud de información presentada por la solicitante.

En cuanto al derecho, se sostuvieron como causales de ilegalidad las siguientes: 1º) Su divulgación afecta los derechos comerciales o económicos de AstraZeneca, puesto que se trata de información sumamente sensible y secreta (artículo 21 N° 2), considerando que su representada está amparada



por el secreto comercial; y 2) Se produce la afectación del interés nacional al referirse a Salud Pública (artículo 21 N° 4).

Alude que existe una ausencia de motivación en el acto reclamado, el que además es carente de toda lógica.

Indica que no respeta los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y que en el mismo hay sólo menciones genéricas de normas y hechos en términos genéricos para cimentar el acto administrativo

Por otra parte, denuncia que se omite aplicar el test de daño, ya que expresa que el beneficio de entregar la información no es mayor al daño que provoca al entregarla, sin efectuar dicho análisis razonado en la decisión de amparo.

Finalmente se refiere a la improcedencia de aplicar el principio de divisibilidad, toda vez que hay mucha información que no son actos administrativos, sino que se trata de información relativa a un contrato celebrado entre un particular y la Administración.

Por todo lo anterior, solicita acoger en todas sus partes el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto la Decisión recaída en el amparo Rol C2977-21 del Consejo para la Transparencia.

**2º)** Que comparece don David Ibaceta Medina, abogado Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia, quien informando el reclamo de ilegalidad, solicita su rechazo, toda vez que la Decisión de Amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, se ajustó a derecho y al espíritu del texto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, fundando sus alegaciones en los siguientes hechos, a saber, 1) La información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución y los artículos 5º, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar la Subsecretaría de Salud Pública en el ejercicio de sus funciones públicas; 2) La información que se ha ordenado entregar no afecta los derechos económicos ni comerciales de Astrazeneca S.A, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley, ya referida. Al efecto: a) No solo debe invocarse la causal, sino que acreditarse el verbo rector de “afectar”, y b) El solo hecho que los contratantes establezcan cláusulas de confidencialidad no puede afectar la



primacía normativa de la Constitución Política de la República que establece el principio general de la publicidad; y 3) La decisión de amparo C2977-21 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre la adquisición de vacunas covid-19 de parte de Astrazeneca, previa aplicación del principio de divisibilidad, por cuanto no tiene la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configuró en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la ley. En efecto, se tomaron los resguardos del caso, ya que se ordenó la entrega parcial de la información pedida.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción interpuesta, por no existir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva confirmar la Decisión de Amparo Rol C2977-21.

3º) Que, en consideración a que tercero interesado no evacuó el informe solicitado, se prescinde del mismo por resolución de 14 de febrero de 2022.

4º) Que como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

5º) Que, la información objeto del reclamo consiste en un contrato suscrito entre el Ministerio de Salud con la empresa Astrazeneca S.A. para adquirir vacunas por Covid 19, en el ejercicio de sus funciones públicas contenidas, entre otras, en el artículo 1º del DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las Leyes N° 18.933 y N° 14.469, consistente en: “ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de



rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones” y encargarse de “La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas de conformidad a la letra e), del artículo 4º, de la citada ley.

En este contexto, el Subsecretario de Salud Pública, que de conformidad al artículo 9º, del aludido cuerpo normativo, le corresponde la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas, debe administrar además: “el financiamiento previsto para las acciones de salud pública, correspondientes a las prestaciones y actividades que se realicen para dar cumplimiento a programas de relevancia nacional y aquellas que la ley obligue a que sean financiadas por el Estado, independientemente de la calidad previsional del individuo o institución que se beneficie, pudiendo ejecutar dichas acciones directamente, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, de las entidades que integran el Sistema, o mediante la celebración de convenios con las personas o entidades que correspondan”.

6º) Que por su parte, el legislador he establecido en términos expresos que es pública la información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su origen, a menos que se encuentre sujeta a causales excepcionales de reserva, por ende, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Transparencia, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, el cual consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Luego el artículo 5º de la citada Ley establece que “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las





excepciones que establece la ley y las previstas en otra leyes de quórum calificado.

Asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

En este mismo sentido, el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

7º) Que, queda claro que ha sido el mismo legislador quien establece el derecho de todas las personas a acceder a “los contratos y acuerdos” que obran en poder del Estado, y especialmente aquellos suscritos por un órgano de la Administración para el cumplimiento de sus funciones públicas, como ocurre con el contrato requerido para efectos de adquirir vacunas y así enfrentar la actual pandemia que afecta a nuestro país como al mundo entero.

8º) Que, en mérito de los antecedentes se advierte que los argumentos en que la reclamante funda la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, son genéricos por lo que la Decisión de Amparo, lo consigna expresamente: “.. en la especie, la reclamada únicamente mencionó que la divulgación de la información solicitada, podría perjudicar la adquisición, entrega o recepción de los productos para la inoculación de la población como medida tendiente a detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19. Por su parte, el tercero sólo señaló que aquella influye en el interés nacional al referirse a la salud pública del país en su conjunto y a sus intereses económicos y comerciales, al propender dentro de un marco de confidencialidad que las negociaciones arriben al beneficio de la población toda. De esta forma, tanto la Subsecretaría como la farmacéutica, no mencionan de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente



especificidad al interés nacional y/ o a la salud pública”. De esta forma, poco coherente resulta que la reclamante señale que el Consejo no aplicó el test de daño para resolver el amparo, ya que precisamente se realizó el señalado test, y en dicha virtud se concluyó que en mérito de las alegaciones de la reclamante, por cierto genéricas, no resultaba posible determinar el daño o afectación concreta y real al bien jurídico cuya vulneración se alegó.

9º) Que, en cuanto a la alegación fundada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, que se funda en que la publicidad de la información afectaría los derechos económicos y comerciales de la reclamante, la Ley de Transparencia, en concordancia con lo mandado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. En consecuencia, la hipótesis de secreto o reserva exige respecto de cada una de ellas un examen de “afectación”, esto es un análisis para ponderar el daño que la publicidad puede generar al valor jurídicamente protegido.

10º) Que, en el mismo sentido ha de destacarse que la carga de la argumentación y prueba de toda causal de secreto, es de la empresa interesada; lo que en la especie tampoco aconteció.

11º) Que, en cuanto a las cláusulas de confidencialidad pactadas en los contratos suscritos por la reclamante y también constituyen fundamento de sus alegaciones, debe señalarse que la supremacía contractual, la autonomía de la voluntad principio básico en materia contractual, no puede anteponerse a una norma constitucional obligatoria, ya que éstas, no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

12º) Que, esta Corte comparte plenamente los fundamentos de la decisión atacada por esta vía, en cuanto a que la publicidad parcial del contrato de adquisición de vacunas, fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor participación en el plan nacional de vacunación de carácter voluntario, en beneficio e interés de la población toda.

Así entonces, la información solicitada resulta ser relevante para efectos de la comprobación en relación con lo informado por la autoridad,



respecto de los datos sobre características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de las mismas, la posibilidad de comparación con las restantes vacunas disponibles para inocular a la población, todo lo cual claramente incide en la tranquilidad, seguridad y confianza en relación a las dosis administradas.

13º) Que, sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que esta materia ya fue resuelta por esta Corte, en consecuencia, el contrato objeto del presente reclamo, ya es público.

14º) Que, en estas circunstancias la Decisión de Amparo que se ha atacado por este reclamo, se encuentra ajustada a derecho, se dictó dentro de las atribuciones y competencias que expresamente el legislador entregó al Consejo recurrido, por lo que el acto recurrido resulta legal y fundado por lo que no cabe sino rechazar la presente reclamación.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 3, 5, 21, 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara que **se rechaza, con costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A., en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C2977-2021.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la Ministra Sra. Book.**

**N° Contencioso Administrativo-479-2021**

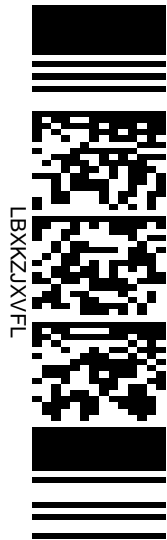
Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Itma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:46:32

JENNY MARTA BOOK REYES  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:05:54



ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 10:39:15



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

1º) Que recurrió de ilegalidad, al tenor del artículo 28 de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A. en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C3810-21 de 07 de septiembre de 2021, por medio de la cual se dispuso acoger parcialmente el amparo deducido por don Diego Fuentes Peñaloza, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega al reclamante de copia del contrato de vacunas COVID-19 que firmó Chile con las empresas Astrazeneca, Pfizer, Sinovac y Johnson & Johnson; reservando de estos últimos toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento, así como todo dato personal de contexto que pueda contener.

Previas citas legales pide que se deje sin efecto la decisión, por cuanto la información solicitada reviste el carácter de confidencial, involucra secretos comerciales de su representada y, además, su publicidad afecta el interés nacional, particularmente en lo que se refiere a la salud pública de sus habitantes, y se resuelva, en su lugar, que se rechaza en todas sus partes la solicitud de información presentada por el solicitante.

En cuanto al derecho, el reclamo se funda en las siguientes causales de ilegalidad las siguientes: 1º) Su divulgación afecta los derechos comerciales o económicos de AstraZeneca, puesto que se trata de información sumamente sensible y secreta (artículo 21 N° 2), considerando que su representada está amparada por el secreto comercial; y 2) Se produce la afectación del interés nacional al referirse a Salud Pública (artículo 21 N° 4).

Alude que existe una ausencia de motivación en el acto reclamado, el que además es carente de toda lógica.

Indica que no respeta los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y que en el mismo hay sólo menciones genéricas de normas y hechos en términos genéricos para cimentar el acto administrativo



Por otra parte, denuncia que se omite aplicar el test de daño, ya que expresa que el beneficio de entregar la información no es mayor al daño que provoca al entregarla, sin efectuar dicho análisis razonado en la decisión de amparo.

Finalmente se refiere a la improcedencia de aplicar el principio de divisibilidad, toda vez que hay mucha información que no son actos administrativos, sino que se trata de información relativa a un contrato celebrado entre un particular y la Administración.

Por todo lo anterior, solicita acoger en todas sus partes el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto la Decisión recaída en el amparo Rol C3810-21 del Consejo para la Transparencia.

2º) Que, comparece don David Ibaceta Medina, abogado, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia, quien informando el reclamo de ilegalidad, solicita su íntegro rechazo, toda vez que la Decisión de Amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, se ajustó a derecho y al espíritu constitucional sobre esta materia de transparencia y acceso a la información pública. Sostiene los siguientes argumentos: 1) La información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución y los artículos 5º, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar la Subsecretaría de Salud Pública en el ejercicio de sus funciones públicas; 2) La información que se ha ordenado entregar no afecta los derechos económicos ni comerciales de Astrazeneca S.A, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley ya referida. Al efecto explica que: a) No solo debe invocarse la causal, sino que acreditarse el verbo rector de “afectar”, y b) El solo hecho que los contratantes establezcan cláusulas de confidencialidad no puede afectar la primacía normativa de la Constitución Política de la República que establece el principio general de la publicidad; y 3) La decisión de amparo C3810-21 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre la adquisición de vacunas covid-19 de parte de Astrazeneca, previa aplicación del principio de divisibilidad, por cuanto no tiene la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente



especificidad, por lo que no se configuró en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la ley.

En efecto refiere, se tomaron los resguardos del caso, ya que se ordenó la entrega parcial de la información pedida.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción interpuesta, por no existir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva confirmar la Decisión de Amparo Rol C3810-21.

3º) Que en consideración a que tercero interesado no evacuó el informe solicitado, se prescinde del mismo por resolución de 18 de enero de 2022.

4º) Que como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

5º) Que, la información objeto del reclamo consiste en un contrato suscrito entre el Ministerio de Salud con la empresa Astrazeneca S.A. para adquirir vacunas por Covid 19, en el ejercicio de sus funciones públicas contenidas, entre otras, en el artículo 1º del DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las Leyes N° 18.933 y N° 14.469, consistente en: “ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones” y encargarse de “La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas de conformidad a la letra e), del artículo 4º, de la citada ley.





En este contexto, el Subsecretario de Salud Pública, que de conformidad al artículo 9º, del aludido cuerpo normativo, le corresponde la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas, debe administrar además: “el financiamiento previsto para las acciones de salud pública, correspondientes a las prestaciones y actividades que se realicen para dar cumplimiento a programas de relevancia nacional y aquellas que la ley obligue a que sean financiadas por el Estado, independientemente de la calidad previsional del individuo o institución que se beneficie, pudiendo ejecutar dichas acciones directamente, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, de las entidades que integran el Sistema, o mediante la celebración de convenios con las personas o entidades que correspondan”.

6º) Que por su parte, el legislador he establecido en términos expresos que es pública la información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su origen, a menos que se encuentre sujeta a causales excepcionales de reserva, por ende, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Transparencia, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, el cual consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Luego el artículo 5º de la citada Ley establece que “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece la ley y las previstas en otra leyes de quórum calificado.

Asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación,



origen, clasificación o procesamiento a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

En este mismo sentido, el inciso 2º del artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

7º) Que, queda claro que ha sido el mismo legislador quien establece el derecho de todas las personas a acceder a “los contratos y acuerdos” que obran en poder del Estado, y especialmente aquellos suscritos por un órgano de la Administración para el cumplimiento de sus funciones públicas, como ocurre con el contrato requerido para efectos de adquirir vacunas y así enfrentar la actual pandemia que afecta a nuestro país como al mundo entero.

8º) Que, en mérito de los antecedentes se advierte que los argumentos en que la reclamante funda la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, son genéricos por lo que la Decisión de Amparo, lo consigna expresamente: “.. en la especie, la reclamada únicamente mencionó que la divulgación de la información solicitada, podría perjudicar la adquisición, entrega o recepción de los productos para la inoculación de la población como medida tendiente a detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19. Por su parte, el tercero sólo señaló que aquella influye en el interés nacional al referirse a la salud pública del país en su conjunto y a sus intereses económicos y comerciales, al propender dentro de un marco de confidencialidad que las negociaciones arriben al beneficio de la población toda. De esta forma, tanto la Subsecretaría como la farmacéutica, no mencionan de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y/ o a la salud pública”. De esta forma, poco coherente resulta que la reclamante señale que el Consejo no aplicó el test de daño para resolver el amparo, ya que precisamente se realizó el señalado test, y en dicha virtud se concluyó que en mérito de las alegaciones



de la reclamante, por cierto genéricas, no resultaba posible determinar el daño o afectación concreta y real al bien jurídico cuya vulneración se alegó.

9º) Que, en cuanto a la alegación fundada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, que se funda en que la publicidad de la información afectaría los derechos económicos y comerciales de la reclamante, la Ley de Transparencia, en concordancia con lo mandado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. En consecuencia, la hipótesis de secreto o reserva exige respecto de cada una de ellas un examen de “afectación”, esto es un análisis para ponderar el daño que la publicidad puede generar al valor jurídicamente protegido.

10º) Que, en el mismo sentido ha de destacarse que la carga de la argumentación y prueba de toda causal de secreto, es de la empresa interesada; lo que en la especie tampoco aconteció.

11º) Que, en cuanto a las cláusulas de confidencialidad pactadas en los contratos suscritos por la reclamante y también constituyen fundamento de sus alegaciones, debe señalarse que la supremacía contractual, la autonomía de la voluntad principio básico en materia contractual, no puede anteponerse a una norma constitucional obligatoria, ya que éstas, no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

12º) Que, esta Corte comparte plenamente los fundamentos de la decisión atacada por esta vía, en cuanto a que la publicidad parcial del contrato de adquisición de vacunas, fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor participación en el plan nacional de vacunación de carácter voluntario, en beneficio e interés de la población toda.

Así entonces, la información solicitada resulta ser relevante para efectos de la comprobación en relación con lo informado por la autoridad, respecto de los datos sobre características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de las mismas, la posibilidad de comparación con las restantes vacunas disponibles para inocular a la



población, todo lo cual claramente incide en la tranquilidad, seguridad y confianza en relación a las dosis administradas.

13º) Que, sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que esta materia ya fue resuelta por esta Corte, en consecuencia, el contrato objeto del presente reclamo, ya es público.

14º) Que, en estas circunstancias la Decisión de Amparo que se ha atacado por este reclamo, se encuentra ajustada a derecho, se dictó dentro de las atribuciones y competencias que expresamente el legislador entregó al Consejo recurrido, por lo que el acto recurrido resulta legal y fundado por lo que no cabe sino rechazar la presente reclamación.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 3, 5, 21, 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara que **se rechaza, con costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A., en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C3810-21.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la Ministra Sra. Book.**

**N° Contencioso Administrativo-491-2021**

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:46:13

JENNY MARTA BOOK REYES  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:05:51



ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 10:39:12



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

1º) Que recurrió de ilegalidad, al tenor del artículo 28 de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A. en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C5814-21 de 02 de diciembre de 2021, por medio de la cual se dispuso acoger parcialmente el amparo deducido por don Gabriel San Martín Arias, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de variada información singularizada en tanto en la solicitud como en la Decisión impugnada, entre la que se encuentran (i) los 2 de 46 contratos que se suscribieron para la compra de las vacunas del plan de vacunación y (ii) los actos administrativos que formalizan la compra de las vacunas vinculados a la empresa Astrazeneca S.A., reservándose toda la información referente a la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento.

Previas citas legales pide que se deje sin efecto la decisión, por cuanto la información solicitada reviste el carácter de confidencial, involucra secretos comerciales de su representada y, además, su publicidad afecta el interés nacional, particularmente en lo que se refiere a la salud pública de sus habitantes, y se resuelva, en su lugar, que se rechaza en todas sus partes la solicitud de información presentada por la solicitante.

En cuanto al derecho, el presente recurso se funda en las siguientes causales de ilegalidad: 1º) Su divulgación afecta los derechos comerciales o económicos de AstraZeneca, puesto que se trata de información sumamente sensible y secreta (artículo 21 N° 2), considerando que su representada está amparada por el secreto comercial; y 2) Se produce la afectación del interés nacional al referirse a Salud Pública (artículo 21 N° 4).

Alude que existe una ausencia de motivación en el acto reclamado, el que además es carente de toda lógica.

Refiere además, que no respeta los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y que en el mismo hay sólo menciones genéricas de normas y hechos en términos genéricos para cimentar el acto administrativo



Por otra parte, denuncia que se omite aplicar el test de daño, ya que expresa que el beneficio de entregar la información no es mayor al daño que provoca al entregarla, sin efectuar dicho análisis razonado en la decisión de amparo.

Finalmente se refiere a la improcedencia de aplicar el principio de divisibilidad, toda vez que hay mucha información que no son actos administrativos, sino que se trata de información relativa a un contrato celebrado entre un particular y la Administración.

Por todo lo anterior, solicita acoger en todas sus partes el reclamo de ilegalidad, dejando sin efecto la Decisión recaída en el amparo Rol C5814-21 del Consejo para la Transparencia.

2º) Que, comparece don David Ibaceta Medina, abogado, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia, quien informando el reclamo de ilegalidad, solicita su íntegro rechazo, toda vez que la Decisión de Amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, se ajustó a derecho y al espíritu del texto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Expone como fundamentos los siguientes: 1) La información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución y los artículos 5º, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar la Subsecretaría de Salud Pública en el ejercicio de sus funciones públicas; 2) La información que se ha ordenado entregar no afecta los derechos económicos ni comerciales de Astrazeneca S.A, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley, ya referida. Al efecto: a) No solo debe invocarse la causal, sino que acreditarse el verbo rector de “afectar”, y b) El solo hecho que los contratantes establezcan cláusulas de confidencialidad no puede afectar la primacía normativa de la Constitución Política de la República que establece el principio general de la publicidad; y 3) La decisión de amparo C5814-21 no resulta ilegal al disponer la entrega de la información sobre la adquisición de vacunas covid-19 de parte de Astrazeneca, previa aplicación del principio de divisibilidad, por cuanto no tiene la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configuró en la





especie la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la ley. En efecto, se tomaron los resguardos del caso, ya que se ordenó la entrega parcial de la información pedida.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción interpuesta, por no existir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva confirmar la Decisión de Amparo Rol C5814-21.

**3º)** Que en consideración a que tercero interesado no evacuó el informe solicitado, se prescinde del mismo por resolución de 31 de enero de 2022.

**4º)** Que como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

**5º)** Que, la información objeto del reclamo consiste en un contrato suscrito entre el Ministerio de Salud con la empresa Astrazeneca S.A. para adquirir vacunas por Covid 19, en el ejercicio de sus funciones públicas contenidas, entre otras, en el artículo 1º del DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las Leyes N° 18.933 y N° 14.469, consistente en: “ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones” y encargarse de “La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas de conformidad a la letra e), del artículo 4º, de la citada ley.



En este contexto, el Subsecretario de Salud Pública, que de conformidad al artículo 9º, del aludido cuerpo normativo, le corresponde la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas, debe administrar además: “el financiamiento previsto para las acciones de salud pública, correspondientes a las prestaciones y actividades que se realicen para dar cumplimiento a programas de relevancia nacional y aquellas que la ley obligue a que sean financiadas por el Estado, independientemente de la calidad previsional del individuo o institución que se beneficie, pudiendo ejecutar dichas acciones directamente, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, de las entidades que integran el Sistema, o mediante la celebración de convenios con las personas o entidades que correspondan”.

6º) Que por su parte, el legislador he establecido en términos expresos que es pública la información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su origen, a menos que se encuentre sujeta a causales excepcionales de reserva, por ende, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Transparencia, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, el cual consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Luego el artículo 5º de la citada Ley establece que “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece la ley y las previstas en otra leyes de quórum calificado.

Asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación,



origen, clasificación o procesamiento a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

En este mismo sentido, el inciso 2º del artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

7º) Que, queda claro que ha sido el mismo legislador quien establece el derecho de todas las personas a acceder a “los contratos y acuerdos” que obran en poder del Estado, y especialmente aquellos suscritos por un órgano de la Administración para el cumplimiento de sus funciones públicas, como ocurre con el contrato requerido para efectos de adquirir vacunas y así enfrentar la actual pandemia que afecta a nuestro país como al mundo entero.

8º) Que, en mérito de los antecedentes se advierte que los argumentos en que la reclamante funda la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, son genéricos por lo que la Decisión de Amparo, lo consigna expresamente: “.. en la especie, la reclamada únicamente mencionó que la divulgación de la información solicitada, podría perjudicar la adquisición, entrega o recepción de los productos para la inoculación de la población como medida tendiente a detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19. Por su parte, el tercero sólo señaló que aquella influye en el interés nacional al referirse a la salud pública del país en su conjunto y a sus intereses económicos y comerciales, al propender dentro de un marco de confidencialidad que las negociaciones arriben al beneficio de la población toda. De esta forma, tanto la Subsecretaría como la farmacéutica, no mencionan de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y/ o a la salud pública”. De esta forma, poco coherente resulta que la reclamante señale que el Consejo no aplicó el test de daño para resolver el amparo, ya que precisamente se realizó el señalado test, y en dicha virtud se concluyó que en mérito de las alegaciones



de la reclamante, por cierto genéricas, no resultaba posible determinar el daño o afectación concreta y real al bien jurídico cuya vulneración se alegó.

9º) Que, en cuanto a la alegación fundada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, que se funda en que la publicidad de la información afectaría los derechos económicos y comerciales de la reclamante, la Ley de Transparencia, en concordancia con lo mandado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. En consecuencia, la hipótesis de secreto o reserva exige respecto de cada una de ellas un examen de “afectación”, esto es un análisis para ponderar el daño que la publicidad puede generar al valor jurídicamente protegido.

10º) Que, en el mismo sentido ha de destacarse que la carga de la argumentación y prueba de toda causal de secreto, es de la empresa interesada; lo que en la especie tampoco aconteció.

11º) Que, en cuanto a las cláusulas de confidencialidad pactadas en los contratos suscritos por la reclamante y también constituyen fundamento de sus alegaciones, debe señalarse que la supremacía contractual, la autonomía de la voluntad principio básico en materia contractual, no puede anteponerse a una norma constitucional obligatoria, ya que éstas, no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

12º) Que, esta Corte comparte plenamente los fundamentos de la decisión atacada por esta vía, en cuanto a que la publicidad parcial del contrato de adquisición de vacunas, fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor participación en el plan nacional de vacunación de carácter voluntario, en beneficio e interés de la población toda.

Así entonces, la información solicitada resulta ser relevante para efectos de la comprobación en relación con lo informado por la autoridad, respecto de los datos sobre características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de las mismas, la posibilidad de comparación con las restantes vacunas disponibles para inocular a la



población, todo lo cual claramente incide en la tranquilidad, seguridad y confianza en relación a las dosis administradas.

13º) Que, sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que esta materia ya fue resuelta por esta Corte, en consecuencia, el contrato objeto del presente reclamo, ya es público.

14º) Que, en estas circunstancias la Decisión de Amparo que se ha atacado por este reclamo, se encuentra ajustada a derecho, se dictó dentro de las atribuciones y competencias que expresamente el legislador entregó al Consejo recurrido, por lo que el acto recurrido resulta legal y fundado por lo que no cabe sino rechazar la presente reclamación.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 3, 5, 21, 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara que **se rechaza, con costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por doña Ingrid Servín Valderrama, en representación de AstraZeneca S.A., en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión de amparo Rol C5814-21.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la Ministra Sra. Book.**

**N° Contencioso Administrativo-628-2021.**

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Il. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:45:52

JENNY MARTA BOOK REYES  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 12:05:48



XEHZJPRL

ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/05/2022 10:39:10



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>